

Movimientos sociales: nuevos escenarios y desafíos inéditos

Raúl Zibechi*

* *Profesor
e Investigador
de la Multiversidad
Franciscana
de América Latina.
Editor
de política internacional
del semanario
uruguayo Brecha.*

Los movimientos sociales latinoamericanos ocuparon el centro del escenario político en la década neoliberal de los noventa y hasta los primeros años del nuevo siglo, a partir de su activa resistencia a las privatizaciones, los programas de ajuste estructural y el desmontaje de los estados nacionales. El éxito de esas resistencias, canalizadas a través de amplias movilizaciones que en ocasiones derivaron en levantamientos populares o de procesos electorales que desplazaron a las elites tradicionales de los gobiernos, fue modificando el escenario político. El ascenso de gobiernos de signo progresista y de izquierda fue la forma más visible que asumieron los cambios que se venían gestando en la base de la sociedad desde comienzos de la década del noventa. Los procesos electorales que se registraron desde fines de 2005 profundizaron y consolidaron los cambios en curso y le dieron a la región una fisonomía nueva.

En efecto, en seis de las once elecciones presidenciales que se realizaron en ese lapso triunfaron fuerzas que se proclaman progresistas o de izquierda en Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, Nicaragua y Venezuela. Aun en aquellos países en los que estas fuerzas no alcanzaron el triunfo (Colombia, México y Perú), el significativo apoyo popular adquirido les permite pasar a jugar un papel decisivo en los respectivos escenarios políticos nacionales.

Estos cambios, generados en gran medida por la intensa actividad de los movimientos sociales, contribuyeron también a correrlos del centro del escenario, a tal punto que a menudo dejaron de ser uno de los factores fundamentales de las agendas nacionales. A lo largo de 2006, quedó en evidencia que la confrontación entre los movimientos y los gobiernos conservadores, que había pautado la década anterior, estaba siendo desplazada por la creciente polarización entre los nuevos gobiernos progresistas y las derechas refractarias a los cambios, aliadas a la administración de George W. Bush. De este modo viene sucediendo en Bolivia y Venezuela (ahora, al parecer, también en Ecuador), pero a menudo se han registrado situaciones similares en Argentina, Brasil y Uruguay, donde las derechas han sido capaces de crear circunstancias que fuerzan a los movimientos a posicionarse a favor de gobiernos con los que tienen coincidencias apenas puntuales.

En paralelo, la exitosa resistencia al modelo creó una nueva relación de fuerzas, particularmente en Sudamérica, que puso en primer plano la cuestión de la integración regional —con dos proyectos en disputa¹— ante la que numerosos movimientos encuentran dificultades a la hora de fijar posición. Parece evidente que Estados Unidos no juega solo en una Sudamérica que ya no puede ser considerada su “patio trasero”, y que se consolida un cierto multilateralismo impulsado, entre otros, por la activa presencia de un país como Brasil, que viene exhibiendo capacidad de ejercer un peso determinante en la región. Por último, aparece un tema nuevo y complejo que ha generado conflictos y divisiones: las relaciones gobiernos-movimientos en aquellos países dirigidos por fuerzas progresistas y de izquierda. Los movimientos sociales no siempre supieron advertir la profundidad de los cambios en marcha y ubicarse ante escenarios mucho más complejos y contradictorios que no admiten lecturas simplistas.

Actuando en escenarios complejos

Uno de los hechos más destacados del nuevo escenario, desde una mirada centrada en los movimientos, es la dificultad de encontrar ejes temáticos capaces de aglutinar un amplio conjunto de luchas locales y regionales, como sucedió en la década del noventa con las resistencias a las privatizaciones y paquetes de ajuste estructural, y más tarde con la oposición al Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA). Los principales hechos

“Uno de los hechos más destacados del nuevo escenario, desde una mirada centrada en los movimientos, es la dificultad de encontrar ejes temáticos capaces de aglutinar un amplio conjunto de luchas locales y regionales, como sucedió en la década del noventa con las resistencias a las privatizaciones y paquetes de ajuste estructural, y más tarde con la oposición al Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA)”

sociales de 2006 muestran una aguda fragmentación temática que incluye un amplio abanico que va desde la resistencia a la firma de Tratados de Libre Comercio (TLCs), que motivó movilizaciones importantes en Ecuador, Perú, Colombia y Centroamérica (Seoane y Algranati, 2006), hasta la lucha democrática y contra las formas “arcaicas” y autoritarias de dominación, que tuvo en las movilizaciones contra el fraude electoral en México (Ceceña, 2006) y en la sublevación de Oaxaca (Hernández Navarro, 2006) sus manifestaciones más destacadas. En paralelo, despunta la resistencia a las nuevas aristas que asume el proceso de acumulación de capital en el continente (minería a cielo abierto, *agrobusiness*, celulosa), a menudo impulsado por gobiernos autodenominados progresistas. Estos conflictos constituyen una buena muestra de las dificultades que encuentran avezadas organizaciones como el Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) de Brasil, y sobre todo las más nuevas, como la asamblea ambientalista de Gualaguaychú (Argentina), para posicionarse en escenarios caracterizados por la enorme legitimidad popular de los nuevos gobernantes. Inmersas en este contexto, aparecen rotundas movilizaciones de apoyo a los gobiernos de izquierda –como las protagonizadas por los movimientos bolivianos contra la oligarquía “autonomista” de Santa Cruz– cada vez que estos son desafiados por las elites conservadoras que se resisten al recorte de sus privilegios. Pero, a la vez, los mismos movimientos presionan en sentido inverso para acelerar el cumplimiento de demandas postergadas.

Dentro de este panorama enmarañado y reacio a las simplificaciones, parece necesario resaltar algunos conflictos y situaciones que pueden marcar inflexiones o tendencias a escala regional. El primero de ellos se deduce, precisamente, de las potentes movilizaciones realizadas en diciembre en Cochabamba por un conjunto de actores (cocalleros, regantes, guerreros del agua, indígenas) que muestran que el ciclo de protesta boliviano está lejos de haberse agotado, que la movilización callejera es capaz de frenar las ambiciones de la derecha y la oligarquía de per-



© Dorothea Haerlin

petuar sus privilegios y bloquear los cambios, y que son en definitiva la garantía de que el proceso que comanda el gobierno de Evo Morales consiga avanzar. Algo similar habrían señalado los movimientos en Venezuela durante el golpe de Estado de abril de 2002 y el paro petrolero de 2003: los límites de cualquier intento restaurador ante la masiva movilización social.

Lo anterior no pretende insinuar que los cambios en marcha en países como Bolivia y Venezuela (y tal vez Ecuador) sean irreversibles. Se trata apenas de constatar las dificultades de las elites y el imperio para impedirlos, en particular en países andinos donde está planteada la descolonización del Estado (Quijano, 2006); o en Venezuela, donde la población desbordó e hizo entrar en crisis el sistema de partidos tradicional y corrupto.

En segundo lugar, se destacan las vastas movilizaciones contra el fraude electoral en México y la del poderoso movimiento indígena y popular aglutinado en la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), posibles síntomas de una crisis del sistema de dominación que anticipa sublevaciones a mayor escala (Ceceña, 2006). Ambos hechos parecen insinuar que el eje de las luchas sociales mexicanas (y quizás del conjunto de la región) se estaría trasladando de las áreas rurales a las ciudades, lo que de confirmarse

puede representar un cambio de largo aliento en las características de la protesta social en ese país. En paralelo, el enfrentamiento entre la “Otra Campaña” impulsada por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y el candidato de centroizquierda Andrés Manuel López Obrador evidencia la existencia de dos proyectos –realidad que puede registrarse, con diferente intensidad, en todo el continente– difícilmente compatibles y con grandes complicaciones para mantener relaciones fluidas y potenciarse mutuamente.

Por otro lado, algunos conflictos de la región sur enseñan los límites de los gobiernos progresistas, así como las dificultades de los movimientos para situarse en el nuevo escenario. El MST, quizá el movimiento más consolidado de la región, ha podido combinar el activo apoyo a la candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva en la segunda vuelta de las elecciones brasileñas con una intransigente movilización para presionar por la reforma agraria, que incluye la toma masiva de tierras. Pero el movimiento ha sido también capaz de enfrentar los emprendimientos que caracterizan la nueva fase de acumulación de capital en la región, como la producción de celulosa, con acciones masivas como la realizada el 8 de marzo de 2006 por las mujeres de Vía Campesina en contra de las instalaciones de Aracruz Celulosa en Río Grande do Sul.

En este apartado habría que situar la protesta de los estudiantes chilenos. Se trata de una “nueva conflictividad política y social”, diferente de las luchas estudiantiles contra la dictadura en los ochenta, ya que es el primer movimiento social de envergadura que experimenta “una sociedad neoliberal triunfante” (Gómez Leyton, 2006). Este movimiento, así como los conflictos ambientales por la contaminación que producen la minería y la celulosa, del mismo modo que la lucha contra el *agrobusiness* que encara el MST en Brasil, parecen ser la respuesta a lo que Gómez Leyton considera gestiones de gobiernos orientadas por “‘el cambio político y social mínimo’ y la ampliación del capitalismo neoliberal en todas las esferas de la sociedad” (2006), que desborda el caso chileno para convertirse en una de las características centrales de los gobiernos progresistas del Cono Sur.

Por último, las rotundas y victoriosas movilizaciones protagonizadas por los movimientos ecuatorianos, y en particular por los indígenas, contra la eventual firma de un TLC con EE.UU. y la caducidad del contrato estatal con la petrolera estadounidense OXY ponen de relieve otros límites del modelo hegemónico: la “cooperación al desarrollo” como modo de debilitar, dividir y cooptar al movimiento indígena con la activa colaboración del Estado (Bretón Solo, 2001; Guerrero y Ospina, 2003). Aunque parece evidente que la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) ha sido debilitada por programas de asistencia dirigidos por organismos financieros internacionales y ejecutados por las ONGs, como el Programa de Desarrollo de los Pueblos Indígenas y Negros del Ecuador (PRODEPINE), lo cierto es que la intensa participación indígena en las movilizaciones realizadas entre marzo y mayo de 2006 evidencia, por lo menos, el fracaso parcial de esos proyectos.

Además del corte “temático”, puede establecerse otro según el carácter de los gobiernos bajo los que actúan los movimientos sociales. El contradictorio y fragmentado fresco que ofrecen los conflictos sociales de 2006 pareciera indicar la existencia de tres grandes escenarios, que influyen de modo determinante en las características que vienen adoptando los movimientos: aquellos que se desarrollan bajo gobiernos neoliberales alineados con EE.UU.; los que lo hacen bajo administraciones progresistas que, en lo fundamental, representan continuidades con el modelo hegemónico; y los que actúan en países con gobiernos que buscan romper con ese modelo. Así como en el primer caso los movimientos mantienen una fuerte presencia en el escenario nacional, en el segundo se registra una potente fragmentación entre ellos –y en ocasiones, en el seno de un mismo movimiento– en cuanto a su posicionamiento frente a los gobiernos. En el tercer caso, los movimientos siguen teniendo un peso determinante pero sus baterías se alternan, en función de las diferentes coyunturas, contra los enemigos de los cambios o bien en apoyo de lo que muchos sienten como “sus” gobiernos.

Desafíos políticos y conceptuales

A partir de los cambios registrados, los movimientos sociales no podrán seguir operando como hasta ahora, muy en particular en el conjunto de países donde la presencia de gobiernos de izquierda y progresistas les imponen afinar tácticas y discutir estrategias para enfrentar situaciones inéditas. Los desafíos que suponen estos cambios vienen siendo debatidos desde hace algún tiempo (Seoane y Taddei, 2004), y no sólo son de carácter político sino también teóricos o conceptuales, ya que las anteriores formas de analizar y comprender la realidad se están mostrando, a menudo, incapaces de dar cuenta de las nuevas situaciones.

El primero de estos desafíos, que incluye a todos los movimientos en los países con gobiernos de signo popular, se refiere a las relaciones que mantendrán con gobiernos surgidos de los propios movimientos o de coyunturas creadas por ellos. A mi modo de ver, conceptos como “cooptación”, “traición”, incluso el llamado “continuismo” respecto del modelo neoliberal, deben ser complejizados ya que resultan inadecuados incluso para definir lo que está sucediendo en los países del Sur como Argentina, Brasil, Chile y Uruguay. Los nuevos escenarios deberían ser comprendidos como el resultado de una construcción en la que participaron tanto los movimientos, a través de sus resistencias y movilizaciones, como las fuerzas políticas y equipos que hoy integran los gobiernos. Esa creación “a dos bandas” no significa eludir las responsabilidades que les caben a los gobernantes progresistas en los potentes rasgos de neoliberalismo y subordinación al capital financiero y transnacional que los caracterizan. Pero parece necesario huir de las simplificaciones, ya que muchos dirigentes y movimientos están lejos de haber sido

“El primero de estos desafíos, que incluye a todos los movimientos en los países con gobiernos de signo popular, se refiere a las relaciones que mantendrán con gobiernos surgidos de los propios movimientos o de coyunturas creadas por ellos. A mi modo de ver, conceptos como ‘cooptación’, ‘traición’, incluso el llamado ‘continuismo’ respecto del modelo neoliberal, deben ser complejizados”

cooptados o “comprados”, y su apoyo a los gobiernos de ese signo se debe a sólidas y profundas convicciones, avaladas por un conjunto de cambios reales en curso y las dificultades, también reales, de romper sin más con el modelo vigente.

Los cambios que estamos viviendo no deben hacer olvidar que tanto el imperio como las elites locales tienen aún el suficiente poder como para intentar bloquear los avances y desgastar a los gobiernos que toman distancias de Washington. En general, los movimientos oscilan entre el apoyo crítico y la crítica sin apoyo a sus gobiernos, pero amplios sectores de nuestras sociedades parecen estar comprendiendo que el mejor escenario posible consiste en la continuidad de administraciones progresistas a las que siempre es necesario presionar para que no se limiten a administrar la situación heredada. El MST se inscribe de lleno en esta tendencia, como la mayor parte de los movimientos bolivianos, ecuatorianos y uruguayos. En el polo opuesto, aparece la “Otra Campaña” lanzada por el EZLN, que desde un primer momento decidió deslindar campos con la izquierda institucional. Aunque sería prematuro evaluar sus resultados, el año 2006 muestra que cortes tan explícitos y radicales como los realizados por el subcomandante insurgente Marcos en su crítica a López Obrador no siempre contribuyen a fortalecer el campo de la movilización social no institucional, ya que generan situaciones de fuerte carga subjetiva entre las bases sociales que sustentan cada uno de esos proyectos políticos.

Los planes estatales para enfrentar la pobreza son un segundo y crucial desafío para los movimientos. Estos planes, en particular el “Bolsa Familia” en Brasil, el “Jefes y Jefas de Hogar” en Argentina y el “Plan de Emergencia” en Uruguay, contienen varios problemas. Entre otros, no representan una ampliación de derechos sino una expansión de las políticas focalizadas y compensatorias diseñadas por los organismos financieros internacionales. Para el sociólogo Francisco de Oliveira, se trata de “un instrumento de control” sobre la base de un dispositivo biopolítico

por el cual el Estado clasifica a las personas según sus carencias, “restaura una especie de clientelismo” y termina por convertir la política en algo irrelevante (2006). Por otro lado, los planes sociales apuntan a los mismos sectores que han movilizado los movimientos en las últimas décadas. Alivian la pobreza, pero no modifican la distribución de la renta ni evitan la creciente concentración de ingresos en los estratos privilegiados. Al afectar la capacidad de organización de los movimientos más activos, se convierten en un factor que dificulta su crecimiento. La difusión de una cultura clientelar, tejida en base a relaciones verticales entre la población pobre atomizada y los estados, es uno de los factores que pueden erosionar la autonomía de los movimientos.

Un tercer desafío refiere al proceso que se está desarrollando en las periferias de las grandes ciudades, donde se juega una triple partida entre los estados, los movimientos y el crimen organizado, que a menudo está siendo ganada por este último. Si es cierto que las periferias de las ciudades del Tercer Mundo son el “nuevo escenario geopolítico decisivo” porque allí los pobres se vienen organizando al margen y contra los estados (Davis, 2007), en muchas ciudades significativas –como San Pablo, donde opera el Primer Comando da Capital, y Río de Janeiro, donde actúa el Comando Vermelho, por citar los casos más conocidos– los movimientos están muy lejos de poder convertirse en alternativa de organización y de vida para esos millones de pobres. Más aún, en suburbios urbanos donde los movimientos de desocupados habían conseguido cierto arraigo y que durante un tiempo se construyeron como espacios de confluencia de los nuevos y viejos pobres (Zibechi, 2003), la recuperación de la presencia estatal ha conseguido neutralizarlos y, en muchos casos, desarticularlos. Todo indica que si en esos espacios suburbanos los nuevos movimientos no consiguen arraigar con fuerza, como es el caso de El Alto en Bolivia y los cerros de Caracas, las alternativas al sistema no podrán consolidarse. En dichas zonas, como nos recuerda con crudeza De Oliveira, rige un verdadero estado de excepción con dos límites muy precisos: planes sociales en el límite de la sobrevivencia, por un lado, y los narcotraficantes por otro.

Por último, los movimientos tienen ante sí el desafío de expandir aquellas iniciativas de producción y reproducción autogestionada de la vida cotidiana que han ido construyendo a lo largo de las dos últimas décadas, como formas de resistencia y sobrevivencia. Me refiero a las múltiples experiencias de micro-poderes locales: desde la gestión del agua en los barrios del sur de Cochabamba (Bolivia) hasta los cientos de huertas comunitarias existentes en ciudades argentinas y uruguayas, pasando por las formas de producción “en masa” que representan las fábricas recuperadas hasta los comedores populares, talleres productivos, espacios de formación y educación y pequeñas clínicas de salud autogestionada creadas por los movimientos. La “Otra Campaña” zapatista es también un intento por expandir este mundo otro que pugna por nacer en el seno de los movimientos territorializados. Aun faltando mucho por hacer en esa dirección, este parece un



© Martín Fernández

buen momento para debatir, con calma, qué papel les puede caer a las instituciones estatales, si es que les cabe alguno, tanto en la consolidación de esos emprendimientos como en su necesaria expansión.

Bibliografía

Bretón Solo, Víctor 2001 *Cooperación al desarrollo y demandas étnicas en los Andes ecuatorianos* (Quito: FLACSO).

Ceceña, Ana Esther 2006 "2006: entre la promesa y la tragedia" en *OSAL* (Buenos Aires: CLACSO) N° 20, mayo-agosto.

Davis, Mike 2007 "Los suburbios de las ciudades del tercer mundo son el nuevo escenario geopolítico decisivo" en *Rebelión*, 2 de marzo. En <www.rebellion.org>.

De Oliveira, Francisco 2006 "A política interna se tornou irrelevante" en *Folha de São Paulo* (San Pablo) 27 de julio.

Gómez Leyton, Juan Carlos 2006 "La rebelión de las y los estudiantes secundarios en Chile. Protesta social y política en una sociedad neoliberal triunfante" en *OSAL* (Buenos Aires: CLACSO) N° 20, mayo-agosto.

Guerrero, Fernando y Ospina, Pablo 2003 *El poder de la comunidad. Ajuste estructural y movimiento indígena en los Andes ecuatorianos* (Buenos Aires: CLACSO).

Hernández Navarro, Luis 2006 "Oaxaca: sublevación y crisis de un sistema regional de dominio" en *OSAL* (Buenos Aires: CLACSO) N° 20, mayo-agosto.

Quijano, Aníbal 2006 "Estado-nación y 'movimientos indígenas' en la región andina: cuestiones abiertas" en *OSAL* (Buenos Aires: CLACSO) N° 19, enero-abril.

Seoane, José y Algranati, Clara 2006 "Los movimientos sociales en la geopolítica continental" en *OSAL* (Buenos Aires: CLACSO) N° 19, enero-abril.

Seoane, José y Taddei, Emilio 2004 "Movimientos sociales, democracia y gobernabilidad neoliberal" en *OSAL* (Buenos Aires: CLACSO) N° 15, septiembre-diciembre.

Zibechi, Raúl 2003 *Genealogía de la revuelta. Argentina: una sociedad en movimiento* (La Plata: Letra Libre).

Notas

1 Me refiero a la Comunidad Sudamericana de Naciones (CSN), impulsada por Brasil, y a la Alternativa Bolivariana de las Américas (ALBA), propuesta por el gobierno de Venezuela.